

FRANCIA

COMENTARIO GENERAL

La actualidad del mes de octubre ha estado centrada, principalmente en temas de inmigración ilegal, en la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de reforma de las pensiones de vejez y en las importantes manifestaciones en la región de Bretaña.

En materia de inmigración ilegal, las declaraciones del ministro del interior, Manuel Valls, sobre la falta de integración de las poblaciones nómadas y la necesidad de que retornen a sus países de origen provocó lo que algunos han calificado como una crisis gubernamental. Dos ministros (la ministra de la vivienda y el y el ministro delegado para la economía solidaria, perteneciente al ala izquierda del partido socialista) han criticado, abierta y duramente, las declaraciones del ministro del interior. Este, por su parte, ha defendido y asumido sus declaraciones en una cadena de TV. Ha recibido el apoyo de varios parlamentarios de su partido y de una gran mayoría de la opinión pública.

Las reiteradas declaraciones de ministros y responsables políticos y la ausencia de intervención del presidente de la República o del primer ministro, aclarando la línea del Gobierno en este tema han ido alimentando la polémica y han creado una tensa situación en el Gobierno

Finalmente, el presidente de la República ha pedido, en el consejo de ministros de 2 de octubre, a los miembros del Gobierno que sean “plenamente conscientes de las exigencias de su misión”. “Participar en un Gobierno obliga a la estricta aplicación de las reglas de solidaridad, unidad y responsabilidad y la responsabilidad política es una ética. Ha pedido al primer ministro que controle mejor el trabajo y la comunicación de los miembros del Gobierno. “Si surge un problema, se me debe pedir un arbitraje pero no exponerlo sobre la plaza pública” indica el presidente de la República.

En este tenso contexto, se procedió a la expulsión de Francia de una menor en situación ilegal escolarizada, lo que ha provocado reacciones adversas, no solamente en la prensa o en algún sector de la opinión pública, sino, también, en el Partido Socialista e, incluso en el seno del Gobierno. De nuevo ha habido críticas al ministro del interior Manuel Valls, pero también apoyo de sectores que consideran que hay que ser firmes ante la inmigración ilegal. En todo caso, la expulsión de la menor ha provocado tensión y manifestaciones en el mundo de la educación, en los Institutos, y en los amplios sectores de defensa de los derechos de los inmigrantes.

El Proyecto de ley de reforma de la jubilación sigue su tramitación parlamentaria en la Asamblea y el Senado. La primera no ha introducido modificaciones sustantivas en el proyecto mientras que el Senado si lo ha hecho. De todas formas, la tramitación sigue adelante, con un nuevo debate en la Asamblea Nacional y previsiblemente, la Ley será aprobada definitivamente antes de finales de año sin grandes cambios en relación con el proyecto presentado por el Gobierno.

Los Gobiernos europeos son cautos a la hora de pronunciarse sobre el calado de la reforma de las pensiones en Francia, pero es sabido que, en privado, suscita perplejidad fuera de Francia.

Sobre el fondo, hay que reconocer que las instituciones europeas no creen que la reforma sea profunda.

El diario Le Monde publicó un artículo recordando que la Comisaría europea de asuntos económicos y monetarios concedió a Francia un plazo suplementario de 2

años para situar su déficit público a menos del 3% del PIB en 2015 a cambio de reformas estructurales de envergadura, en particular la reforma de las pensiones.

El comisario europeo de asuntos económicos, Olli Rhen, ha manifestado recientemente que esperaba un poco más de audacia en la reforma de las pensiones y de las reformas en general: “Francia va en la buena dirección en materia de reformas pero hay mucho camino que recorrer para restablecer la competitividad, crear unos cimientos sólidos para el crecimiento económico y la creación de empleo”, declaró.

Continúa el cierre de empresas en Francia con despidos masivos. La difícil situación económica y de empleo en la región de Bretaña, ha llevado a la población a participar en manifestaciones violentas contra el cierre de empresas en la región y contra los impuestos que “ahogan a las empresas bretonas y a la economía en general”. La gota que ha hecho desbordar el vaso ha sido el impuesto ecológico la “écotaxe” , que paradójicamente fue puesto creado por la anterior mayoría parlamentaria.

Para calmar la tensa situación en Bretaña, el primer ministro ha reafirmado la movilización del Gobierno para responder a las situaciones de urgencia social y territorial de esta región. Se ha comprometido a que el Gobierno, al lado de la región, entidades territoriales y agentes económicos ayude a la región de Bretaña a superar sus dificultades actuales y a preparar su futuro económico y social. Ha anunciado que antes de finales de año se presentará un pacto para el futuro de la Bretaña. Sin esperar ha dicho pacto, ha comunicado la aprobación de algunas medidas inmediatas: acompañamiento personal de cada trabajador despedido, aumento de los medios destinados a la política de prevención de dificultades de las empresas, elaboración inmediata de un plan Bretaña destinado a los ganaderos y a la industria agroalimentaria, aumento de las ayudas económicas al desarrollo de nuevos proyectos o nuevos sectores de actividad en Bretaña, etc. etc.